



UPDATES PHILIPPINES

Publicación del Frente Democrático Nacional de Filipinas

Amsterdamsestraatweg 50, 3513AG Utrecht, Los Países Bajos

T: +31 30 2310431 | E: updates.philippines@ndfp.org | W: updates.ndfp.org

2021 Numero 3

Edición Español

1 de marzo 2021

EDITORIAL

¿Quo vadis, Duterte?

Quizás una mejor pregunta es: “¿Dónde estás, Duterte?” En los últimos meses, el presidente Rodrigo Duterte rara vez ha sido visto en público, sino que aparece en videoclips pregrabados los lunes por la noche. Pero su régimen persiste y se ha vuelto más brutal y opresivo que nunca. Ahora está mayoritariamente bajo el control de militares y policías de alto rango, ex militares y algunos lacayos civiles. Duterte nombró a estos hombres para puestos poderosos y lucrativos, lo que les permitió saquear los recursos naturales del país, robar fondos públicos y traficar con drogas y dedicarse al contrabando.

El desenfrenado gasto militar excesivo y la corrupción a expensas de los servicios sociales han privado a la gente de pruebas masivas, asistencia económica, vacunación y otros servicios vitales y, por lo tanto, han agravado los efectos de la pandemia de COVID-19. Han permitido la expansión de operaciones destructivas de minería y tala, en su mayoría invadiendo los dominios ancestrales de los pueblos indígenas. La expansión de las plantaciones de monocultivos orientadas a la exportación y el contrabando de productos alimenticios importados continúan destruyendo la producción local de alimentos, incluso antes de la avalancha de tifones e inundaciones.

Para frenar las crecientes protestas y otras formas de resistencia de todos los sectores, la camarilla militar de Duterte ha impuesto una ley marcial virtual bajo la apariencia de su Ley Antiterrorista. El Partido Comunista de Filipinas y el Nuevo Ejército Popular fueron rápidamente etiquetados como “terroristas”. Activistas sociales, personalidades del cine y la televisión, periodistas, abogados, parlamentarios de la oposición y prácticamente cualquier persona que les apetezca son etiquetados como miembros o simpatizantes del CPP-NPA. Muchos de ellos han acabado siendo detenidos o asesinados por agentes estatales.

El gobierno de Duterte está prácticamente bajo la autoridad de la llamada Fuerza de Tarea Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local, una junta militar que amenaza a las agencias gubernamentales civiles en todos los niveles con obedecer o de lo contrario serán etiquetadas como rojas. Sin embargo, la creciente represión está fomentando aún más diversas formas de resistencia, y las fuerzas armadas revolucionarias continúan creciendo. Los portavoces regionales del movimiento revolucionario informan sobre la expansión de áreas de operaciones y la formación de nuevos frentes guerrilleros.

Duterte tampoco puede consolarse con el mundo exterior. Las luchas democráticas y antiimperialistas de los pueblos oprimidos se están extendiendo por todo el mundo, incluso en el corazón del capitalismo monopolista. La pandemia ha expuesto aún más el carácter antisocial y anti ambiental del sistema capitalista global y ha agravado aún más sus crisis económicas y políticas.

Los pueblos amantes de la paz de todo el mundo están desenmascarando la tiranía y la brutalidad del régimen de Duterte. Los estados soberanos expresan su descontento con el historial de derechos humanos del régimen. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha puesto en marcha cargos por crímenes de humanidad contra Duterte. La nueva administración estadounidense está presionando a Duterte para que vaya en contra de su antiguo protector, China. Empiezan a aparecer fisuras en la camarilla gobernante. Duterte puede ser demasiado débil física o políticamente para durar incluso hasta las elecciones del próximo año. **UP**



Foto: Save Our Schools Network.

Condenamos la detención de datus, profesores y estudiantes lumad

El 15 de febrero, agentes de seguridad armados del gobierno de Duterte asaltaron una escuela indígena lumad dentro del campus de la Universidad de San Carlos en la ciudad de Cebú y detuvieron a 26 estudiantes, profesores y ancianos de la comunidad. La policía local presentó cargos por abuso de menores, tráfico de niños, secuestro y detención ilegal grave

[continúa página siguiente...]

[... continuación]

contra los profesores Chad Booc y Roshelle Mae Porcadella, los datus Benito Bayao y Segundo Milong, y los estudiantes Jomar Binag, Esmelito Oribawan y Moddie Mansumoy-at.

La redada en la escuela y las detenciones están provocando una tormenta de protestas por parte de las comunidades lumad, los filipinos de todo el país y los defensores de los derechos humanos en el extranjero. La Red Salvar nuestras Escuelas (SOS), defensora de las escuelas indígenas Lumad, condenó enérgicamente la redada: “Una y otra vez, los funcionarios del gobierno de Duterte pronuncian la palabra ‘rescate’, pero esto perturba la paz de los evacuados y estudiantes Lumad, al igual que lo que ocurrió en el Centro de la Misión Haran de la Iglesia Unida de Cristo en Filipinas en la ciudad de Davao en 2015 y en enero de 2020”. El SOS exigió la liberación inmediata de las 26 personas, incluidas las detenidas.

Miles de lumad han sido desplazados de sus comunidades en el sur de Filipinas por las operaciones militares del gobierno de Manila. Muchos se han refugiado en santuarios eclesiásticos y han creado escuelas improvisadas en los centros de evacuación, llamadas “bakwit”. Sin embargo, siguen sufriendo acoso, pues se les acusa de apoyar al movimiento revolucionario armado y de “secuestrar” a sus propios hijos en los centros de refugiados.

En una declaración conjunta, la Universidad de San Carlos y la Sociedad del Verbo Divino declararon que los Lumad que se encontraban dentro del campus universitario estaban llevando a cabo su programa educativo. “Su presencia en la casa de retiros era para su bienestar... se les nutría, cuidaba y trataba teniendo en cuenta sus mejores intereses”, decía la declaración firmada por el arzobispo de Cebú, José Palma, el superior provincial de la SVD, P. Rogelio Bagao, y el presidente de la USC, P. Narciso Cellan Jr.

En la Cámara de Representantes, el vicepresidente Mikee Romero pidió a la Policía Nacional Filipina que “releve a todos los implicados en esta redada ilegal”. Dijo que la redada estuvo “lejos de ser una operación de rescate... hubo muchos gritos, gritos de auxilio, conmoción y lucha. Está claro que el incidente provocó angustia, agonía e incluso trauma a los niños”, citando fotos y vídeos del incidente compartidos en línea por el SOS.

Los legisladores de la oposición Reprs. Eufemia Cullamat, Carlos Isagani Zarate, Ferdinand Gaité, Arlene Brosas, France Castro y Sarah Jane Elago, presentaron conjuntamente una resolución de la Cámara de Representantes en la que pedían una investigación sobre la redada y las detenciones “tipo Gestapo”. “La redada y la detención violentas contra los indígenas que sólo buscan refugio en medio de la pandemia son altamente condenables”, dijeron los seis legisladores.

La redada y las detenciones han recibido una fuerte solidaridad internacional. En Estados Unidos, la Resistencia Borricua - Nueva York, una alianza de la diáspora puertorriqueña, el Movimiento Sunrise - Universidad George Washington, y los Estudiantes Nacionales por la Justicia en Palestina, expresaron su solidaridad con los Lumad de Filipinas. **UP**



Gobierno militar en Myanmar y Filipinas.
Imagen: cpp.ph

CPP y NDFP condenan el golpe de estado en Myanmar

Las fuerzas revolucionarias filipinas se han unido a la comunidad internacional en la condena del golpe de estado del 1 de febrero y la imposición de la emergencia nacional en Myanmar. El Partido Comunista de Filipinas (CPP) expresó su apoyo a la resistencia del pueblo de Myanmar e hizo un llamamiento a los filipinos para “aprender de las lecciones de Myanmar, donde los males antidemocráticos de tener a fuerzas militares ocupando el poder político se han demostrado claramente”.

Oficiales militares de Myanmar encabezados por el General Min Aun Hlaing tomaron el poder político y encarcelaron a los líderes electos y oficiales de la Liga Nacional para la Democracia (LND), incluyendo a su presidenta Aung San Suu Kyi.

Marco Valbuena, Oficial Jefe de Información del Partido Comunista de Filipinas, dijo el 3 de febrero que “el golpe de estado se adelantó a la apertura del parlamento electo en las elecciones del 20 de noviembre de 2020. Los líderes militares rechazaron reconocer el resultado de las elecciones de noviembre, en las que el partido respaldado por los militares sufrió una derrota arrolladora por parte de la LND.

Valbuena dijo que el golpe ha devuelto el monopolio del poder a los militares que dominaron Myanmar por más de 50 años. Bajo el gobierno absoluto de los militares, las masas de Myanmar sufrieron abusos indecibles, violaciones de derechos humanos, guerras genocidas, saqueo de sus recursos económicos y corrupción en los oficiales militares.

[continúa página siguiente...]

[... continuación]

La junta militar llegó a un acuerdo para “compartir el poder” con líderes civiles en 2016, tras garantizársele asientos parlamentarios y el poder de nombrar al vicepresidente, el ministro de defensa, asuntos internos y otros oficiales clave.

En Filipinas, dijo Valbuena, “el poder político de los generales militares ha crecido bajo el régimen de Duterte. Para establecerse como el “hombre fuerte” Duterte expandió los poderes del ejército y la policía, aumentando el presupuesto de las fuerzas armadas de Filipinas y la policía nacional de Filipinas, creando conflictos y designando a antiguos oficiales del ejército en agencias gubernamentales clave.

Hizo un llamamiento al pueblo filipino a resistir los crecientes poderes de los militares; “si la expansión de los poderes militares continúa, Filipinas no quedará lejos de seguir el sangriento camino de las dictaduras militares de Myanmar”, añadió.

En otro comunicado con fecha de 5 de febrero, el Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) condenó también el golpe de estado y reiteró su apoyo a la resistencia del pueblo de Myanmar frente al gobierno militar, señalando que “la dictadura militar está empujando a la gente a contraatacar, conseguir sus derechos democráticos y poner final a la opresión”.

El NDFP llamó igualmente al pueblo filipino a resistir el gobierno militar en todas sus formas tal y como está haciendo el pueblo de Myanmar. **UP**



Equipos de salud de NDFP en comunidades rurales. Foto: cpp.ph

Garantizado el tránsito seguro y sin obstáculos de las vacunas - CPP

El Partido Comunista de Filipinas aseguró el 9 de febrero que la entrega de las vacunas Covid-19 tendrá un “paso seguro y sin obstáculos” a través de las bases y zonas de la guerrilla del Nuevo Ejército del Pueblo.

Marco Valbuena, Jefe de Información del CPP, dijo: “Es una cuestión de principios que el NPA respete todos los

compromisos humanitarios que beneficien a las masas”. El NPA, dijo, se asegurará de que el transporte de las vacunas “tenga un corredor humanitario”.

Valbuena añadió que en las zonas rurales, “el transporte, la distribución y la campaña de inoculación deben ser manejados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja Filipina y otras agencias humanitarias civiles cuyo personal esté debidamente capacitado.”

Utilizar personal armado de las Fuerzas Armadas de Filipinas para la campaña de vacunación, dijo Valbuena, “no animará a la gente a vacunarse, especialmente en muchas zonas del campo donde la gente está traumatizada por la guarnición militar de sus comunidades y los helicópteros de combate de las AFP disparando misiles.”

El pueblo filipino, dijo, está preocupado por la posibilidad de que las AFP utilicen la campaña de vacunación para las operaciones de contrainsurgencia del gobierno de Duterte y exijan “la rendición antes que la vacuna”.

Las fuerzas revolucionarias filipinas piden la distribución gratuita y segura de las vacunas Covid-19. Al mismo tiempo, condenan al gobierno de Duterte por su “lenta, anómala y corrupta adquisición de vacunas.”

En una declaración separada, la sección del Frente Democrático Nacional de Filipinas en Visayas Oriental dijo: “Después de contrabandear vacunas chinas para inocular secretamente a su grupo de seguridad, nadie cree que Duterte tenga algún plan de vacunación masiva o que quiera detener decisivamente la propagación de la pandemia en el país... Mientras los gobiernos de todo el mundo distribuyen millones de dosis para sus ciudadanos, Duterte se ha asegurado de salvarse sólo a sí mismo y dejar al resto del pueblo filipino luchando por un suministro limitado”.

En su presupuesto nacional para 2021, Duterte asignó unos míseros 1.000 millones de pesos filipinos (20,85 millones de dólares) para la adquisición de vacunas, dijo el NDFP. Sin embargo, asignó al menos 85.300 millones de pesos filipinos (1.778 millones de dólares) para las AFP, los “fondos de inteligencia” y su campaña anticomunista. “No puede financiar la vacunación masiva, pero comprará más aviones de combate, helicópteros y aviones de ataque, drones, tanques, bombas de 500 libras, armas de artillería y otros juguetes de guerra”, dijo el NDFP.

Una encuesta reciente realizada por el Centro de Estudios de la ASEAN reveló que el 53,7% de los encuestados filipinos desaprueba la respuesta del gobierno de Duterte a la pandemia del Covid-19, el índice de desaprobación más alto entre los diez países del sudeste asiático. La encuesta se llevó a cabo desde noviembre de 2020 hasta enero de 2021 con encuestados procedentes del mundo académico o de la investigación, las empresas o las finanzas, el gobierno, los grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones regionales e internacionales. **UP**